

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - ORAL
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá, D. C., seis (6) de octubre de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	11001 33 35 029 2022 00023 00
DEMANDANTE:	ROSA ELVIA GUERRERO NOVOA
DEMANDADO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL Y OTRO
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Procede el Despacho a emitir pronunciamiento respecto de la solicitud de medida cautelar presentada por el apoderado judicial de la señora Rosa Elvia Guerrero Novoa, la cual sustenta en que el acto administrativo acusado es violatorio de la Constitución y la ley.

De la solicitud de medida cautelar

La parte demandante solicita el decreto de medida cautelar consistente en suspensión provisional del pago de lo ordenado a través del acto administrativo No. 2921 del 26 de mayo de 2020, mediante el cual se reconoció a la señora Cecilia Guzmán de Herrera, la sustitución pensional como cónyuge supérstite del causante, a partir del 3 de marzo de 2020, mediante auto del 9 de agosto de 2022, se corrió traslado por el termino de cinco días a la contraparte, sin que efectuara pronunciamiento.

CONSIDERACIONES

En la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, las medidas cautelares se constituyen en un instrumento de la garantía efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quien acude a la Jurisdicción en procura de solucionar una determinada controversia. Es del caso recordar que la suspensión provisional de los actos administrativos, se encuentra prevista en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como una medida cautelar en los siguientes términos:

“Art. 229.-En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el juez o magistrado ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Art. 230.-Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el juez o magistrado ponente podrá decretar, una o varias de las siguientes medidas:
(...)

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
(...)” (Subrayado fuera del texto)

Para que proceda la suspensión del acto administrativo acusado, se deben cumplir con los requisitos, oportunidad y trámite establecidos en el artículo 231 de C.P.A.C.A, así:

“Art. 231.-Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

(...)

Caución Art. 232.-(...)No se requerirá de caución cuando se trate de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, de los procesos de tutela, ni cuando la solicitante de la medida cautelar sea una entidad pública.”

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que se le otorga al Juez la facultad de establecer la procedencia de la medida de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, cuando analizado el acto administrativo acusado y las pruebas allegadas, se evidencie la vulneración de las disposiciones invocadas en la demanda.

En ese sentido, la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, es una excepción a la presunción de legalidad que ampara las decisiones de la administración, en los eventos de infringir las normas superiores en que deben fundarse.

CASO CONCRETO:

En el presente caso, la medida cautelar se refiere a la suspensión del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de sobreviviente en favor de la cónyuge supérstite del causante.

El artículo 231 del CPACA establece los requisitos por medio de los cuales hay lugar a la procedencia de las medidas cautelares, así:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

- a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable,
- o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios."

Conforme a lo anterior, y analizando la medida cautelar solicitada no puede concluirse que se presente un perjuicio irremediable, pues no existe prueba, siquiera sumaria, que permita predicar su configuración; mucho menos una debida sustentación de la petición.

Por otra parte, las medidas cautelares están llamadas a proceder cuando la violación invocada "surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud", al respecto, se tiene que, con la solicitud no se aportaron la totalidad de las pruebas que permitan, en este estado temprano del proceso, tener la certeza de la titularidad del derecho, aunado a que, del primer análisis entre el acto y las normas que se consideran vulneradas, no se puede determinar aún la violación alegada, la cual además necesita una recaudación probatoria suficiente que permita vislumbrar la existencia del derecho reclamado.

Con todo, es preciso tener en cuenta la presunción de legalidad de los actos administrativos que se demandan, toda vez que a simple vista no se observa un causal que los desvirtúe.

En ese orden de ideas, en el presente caso no se advierte que se cumpla con los requisitos que al efecto establece el artículo 231 del C.P.A.C.A., circunstancia que impone negar la solicitud de suspensión provisional solicitada.

En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo demandado, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Germán Leónidas Ojeda Moreno, identificado con la cédula de ciudadanía 79.273.274 y portador de la tarjeta profesional 102.298 como apoderado judicial del Ministerio de Defensa Nacional, conforme el poder allegado

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ENRIQUE ARCOS ALVEAR
JUEZ

JFBM

**JUZGADO VEINTINUEVE ADMINISTRATIVO
ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en ESTADO notifico a las partes la providencia anterior

Hoy siete (7) de octubre de 2022 a las 8:00 a.m.

SECRETARIA

Demandante	Luisa.martinez227@gmail.com
Demandado	germanlojedam@gmail.com notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co
Vinculado	nesral@hotmail.com